

Libertad de expresión y protesta social en Argentina

Por María Soledad Cueto

Maestranda en Periodismo de
Investigación, Facultad de
Ciencias de la Educación y la
Comunicación Social,
Universidad del Salvador.

Movilizaciónes realizadas por organismos de Derechos Humanos, piquetes, cacerolazos y asambleas barriales son algunas de las formas que, en los últimos años, adoptó la protesta social en la Argentina. Su intensidad creciente, puesta de manifiesto en diversos acontecimientos, la ha colocado en el centro de la atención no sólo nacional sino también internacional.

La magnitud de la movilidad popular pone en primer plano la reflexión sobre quiénes son los actores sociales, dónde se realizan las demandas y las razones por las que se efectúan los reclamos. Los distintos tipos de beligerancia, privilegiando los que se articularon desde 1976 en adelante, operan como disparadores para intentar responder parcialmente a estos interrogantes.

Asimismo, se intentará indagar sobre la libertad de expresión y las figuras jurídicas que existen en torno a lo que se ha dado en llamar "la despenalización de la protesta social".

Tiempo de protestas

En primer lugar es importante definir el término protesta social. "Si la consideramos como algo distinto, hasta donde esto es posible, de la protesta política, supone la existencia de un marco de orden y legalidad estables para reclamar ciertos requeri-

mientos sociales", así lo expresan los historiadores Luis Alberto Romero y Miguel Ángel De Marco, quienes agregan: "Tal vez habría que hablar de protesta político-social".

En *La Nación Revista* del 17 de octubre pasado, Romero y De Marco reflexionaron y debatieron sobre este tema y se refirieron al giro que tomó la protesta social en Argentina a partir de la segunda mitad del siglo XX. Para De Marco, desde 1955 hasta nuestros días, la Argentina vivió todo género de protestas sociales, muchas instrumentadas con fines que iban más allá de las reivindicaciones de determinado sector y que se mezclaban con motivos políticos o luchas por la conducción de los sindicatos, por ejemplo, a través de la CGT oficial o paralela. Pero, según Romero, durante la dictadura militar emergió una nueva y original forma de protesta social que se amplió luego de 1984: **la defensa de los derechos humanos**. "Es novedoso el propósito, pues no se trata de un reclamo corporativo, y también el planteo: no es una corporación que busca insertarse en el Estado para extraer de él beneficios, sino una auténtica expresión de la sociedad civil", indicó.

De Marco, acercándose a la actualidad, manifestó: "Y sin ser novedoso, pues habían tenido lugar en otras partes, yo diría que los cacerolazos significaron un modo de protesta atípico que mostró que el descontento podía expresarse más allá de las organizaciones sindicales, frente a situaciones que ponían en riesgo los intereses de buena parte de la población o provocaban la irritación de los ciudadanos de diferentes clases sociales".

Además, el historiador observó la protesta contra una de las graves falencias de estos tiempos: **el problema de la inseguridad**. "Este ha provocado que se unieran damnificados -la sociedad toda- para protestar tanto por los casos de 'gatillo fácil' como por los secuestros extorsivos que terminaron con muertes y torturas. El caso Blumberg reunió una de las expresiones más grandes y extendidas de reacción espontánea", señaló.

— *Los piqueteros*

En la actualidad, otro fenómeno importante para analizar es el de los piqueteros. La mirada de los intelectuales contempla distintos aspectos e implica también una discusión acerca de los medios que debe emplear el Estado con el fin de garantizar derechos conculcados a los demás ciudadanos. “La cuestión de los piqueteros -consideró De Marco- es compleja y puede ser contemplada desde distintas facetas: la del clientelismo que se monta a partir de reclamos con un fondo legítimo, como la necesidad de pan y trabajo. O la de la comisión de actos en abierta infracción de la Constitución y de normas jurídicas esenciales”.

Para Romero, “los piqueteros expresan el reclamo de una enorme porción de la sociedad: lo que podría llamarse, en el contexto de la reciente y formidable reestructuración argentina, los perdedores. Se trata de un movimiento social muy grande sobre el que se ha construido un conjunto de organizaciones. Ellas repiten el modo de acción de los sindicatos: actuar como una corporación para exprimir al Estado y obtener algo de lo poco que allí queda”. Y agrega: “Bajo la forma de subsidios y planes de asistencia se mantiene en condiciones de supervivencia a un vasto sector de desocupados y, a la vez, se financia a estas organizaciones. Los piqueteros tienen un discurso anticapitalista, pero sólo de palabra. Las organizaciones piqueteras lo que quieren hacer es exprimir al Estado, que otorgue más planes y prebendas”.

De todos modos, el historiador hizo una distinción: “El problema de la desocupación es espantoso y nos desafía permanentemente. Y, por otro lado, hay muchos emprendimientos de autoorganización realmente muy interesantes”.

Las protestas siempre han dejado secuelas y lecciones. Y las que circulan en las últimas décadas no son la excepción.

Perspectiva histórica

Para analizar las nuevas formas de protesta so-

cial es importante mostrar también las transformaciones del período que nos ocupa, desde el comienzo de la dictadura militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla en 1976. A partir de ese año, con la aplicación sistemática de las políticas neoliberales, empezó un proceso de desestructuración de la sociedad del trabajo que alcanzó su punto culminante durante la década menemista. La transformación de la economía fue de tal magnitud que el desempleo y el empleo ocasional se han convertido en elementos estructurales que modificaron de manera notable tanto la sociedad como sus comportamientos.

Como lógica consecuencia, las viejas formas de organización y de protesta de los trabajadores, si bien no han desaparecido, perdieron vigencia y peso. Los sindicatos son numéricamente débiles; su capacidad de movilización, de presión y poder económico ha disminuido, y buena parte de su acción ha quedado concentrada en los gremios de servicios afectados por la racionalización estatal.

Por su parte, la multiplicidad de grupos y partidos de izquierda no ha logrado, desde el advenimiento de la democracia en 1983, encausar a los trabajadores formales, como había ocurrido a principios del siglo XX y, en parte, en la década de 1960. La transformación de una sociedad centrada en el trabajo, en donde las demandas esenciales eran el aumento salarial o las mejoras en las condiciones laborales, en otra vinculada al desempleo y el empleo ocasional, asociada a la reivindicación de trabajo y de subsidios de desempleo, ha repercutido también en la composición de los actores involucrados y en las formas de protesta.

Las huelgas persisten y coexisten con los nuevos repertorios, pero han perdido el lugar central que ocuparon durante casi un siglo, y hoy los obreros se aferran a los puestos de trabajo y ya no son los protagonistas centrales de la protesta. Ese lugar es ocupado por los excluidos del modelo (desocupados, cartoneros y beneficiarios de planes sociales

estatales), quienes dan forma a un nuevo cuadro de protestas, organizaciones y reclamos en donde los repertorios de confrontación privilegiados son los piquetes y cortes de rutas, pero también la toma y los ataques a edificios públicos.

Dictadura y Democracia: los cambios en la protesta popular desde 1976 a la actualidad

Cuando en 1976 se produjo en Argentina un nuevo golpe militar se generaron cambios profundos en la economía, la sociedad y la cultura que modificaron las formas de la protesta social, y se instauró un gobierno dictatorial sin antecedentes en cuanto a la magnitud de la violación de los derechos humanos.

La protesta obrera estuvo marcada por una política represiva que diezmó las organizaciones de base y eliminó a los trabajadores más combativos. La extensión del autoritarismo a todos los niveles de la sociedad civil ayudó a que algunos sectores de la población buscaran nuevos canales de participación democrática y expresión política, por lo que la protesta social excedió el mundo del trabajo e involucró a familiares de los detenidos y desaparecidos, vecinos, amas de casa, jóvenes y artistas.

Con el advenimiento de los nuevos gobiernos democráticos, a partir de 1983, resurgieron los repertorios de confrontación tradicionales. Pero en los 90, luego de más de una década de transformaciones bajo el signo del neoliberalismo y de las enormes dificultades de los partidos políticos para responder a las demandas de la sociedad, se incorporó a la protesta social una amplia gama de actores y recursos que se expresaron con nuevos repertorios de confrontación.

Dictadura y democracia constituyen dos polos antitéticos que encuentran un punto de confluencia en el contexto neoconservador que las atravesó. Tanto desde Inglaterra, con el liderazgo de Margaret Thatcher, como desde los Estados Unidos, con

Ronald Reagan, se difundieron ideas y prácticas sociales que generaron un vasto consenso en torno del dominio de los mercados. Este proceso permitió la especulación financiera, que facilitó ganancias rápidas a los capitales "impacientes" y destruyó las bases del Estado de Bienestar.

Entre los años 60 y 90, los sindicatos perdieron parte de su poder político, mientras que las grandes empresas eliminaron puestos de trabajo y usaron todo su poder para obtener mayores ganancias, y los gobiernos, en particular los de los llamados países "emergentes", fueron cada vez más dependientes de las decisiones de los organismos internacionales y más benévolos con los dueños de los capitales. Además, la caída de la Unión Soviética afianzó el proceso de globalización puesto en movimiento por el imperialismo moderno y se barrieron las posibilidades de poner límites a la arrogancia de las políticas neoliberales de los Estados Unidos.

En Argentina se realizaron numerosos experimentos acordes con ese clima de idea global, aunque la opresión diferenció claramente a los gobiernos militares de los civiles que les sucedieron. La dictadura militar instalada el 24 de marzo de 1976 cometió un verdadero genocidio e instauró la palabra *desaparecidos* como símbolo de la represión que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas. A través de la represión, fundamentalmente, se implementó la política económica y social del gobierno.

Durante este período, se buscó destruir el tipo de organización sindical afianzado durante la segunda mitad del siglo XX y, en buena medida, los gremios tuvieron que resistir las disposiciones implementadas por el régimen. Entre 1976 y 1981, la magnitud de la represión produjo una notoria desmovilización general de los trabajadores. Durante 1977, los reclamos y las manifestaciones fueron escasos, aún cuando se registraron algunos conflictos en diversos lugares del país. En los años siguientes, la protesta se intensificó y se expresó de diversas formas: trabajo a desgano, presenta-

ción de petitorios, estado de alerta o huelgas sorpresivas que se caracterizaron por su limitada duración para evitar la intervención de las Fuerzas Armadas o policiales.

Recién cuando aparecieron grietas en el poder dictatorial se repudió la política económica del gobierno, aunque ninguna huelga fue convocada en defensa de las libertades elementales cercenadas. A partir de la derrota militar en Malvinas se abrió una crisis política en el régimen militar que lo llevaría a su caída. En ese contexto, los paros generales por mejoras salariales y en repudio al gobierno, realizados en septiembre y octubre de 1982 y en marzo y octubre de 1983, tuvieron mayor repercusión.

— *La resistencia*

El conjunto de la resistencia obrera a la dictadura puede dividirse en dos momentos. Inicialmente tuvo un carácter defensivo. Para comprender este rasgo es preciso tener en cuenta que los militares entendían como “subversivo” todo tipo de confrontación social e instauraron una política destinada a “extirpar” todo intento de “disociación social”. La magnitud de la represión en el campo laboral sólo puede realizarse con el apoyo decidido de los empresarios, que contribuyeron a la depuración del movimiento obrero de todos los elementos que pudieran obstaculizar los planes para disciplinar y subordinar a la clase obrera.

Por su parte, la cúpula sindical sólo en muy pocos casos tuvo una actitud claramente opositora. Buscó, como en el pasado, acercarse a los militares para recuperar el terreno perdido y, al mismo tiempo, intentar la unidad de los dirigentes, pues había fracciones en disputa. Esa unidad tenía el claro objetivo de reconstruir las alianzas políticas que les restituyeran un lugar preponderante en las estructuras de poder.

Como contracara de la actitud de buena parte de la dirigencia sindical, la resistencia a la dictadura tuvo un actor clave en el movimiento de derechos

humanos que, aunque no era nuevo -la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por ejemplo, fue fundada en 1937, impulsada por el Partido Comunista-, adquiere una nueva dimensión con la conformación de asociaciones por parte de los familiares de los afectados por la represión. Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo se constituyeron entre 1976 y 1977.

La resistencia era una clara actitud defensiva y reactiva que se basaba en la defensa de un vínculo primario: el de la familia como base de la solidaridad y de la acción colectiva. Marchas y movilizaciones fueron las formas de protesta cuyo objetivo era la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, y la consigna “Aparición con vida” fue el elemento aglutinante de un movimiento heterogéneo, ya que a los familiares se sumaron otros actores.

El 30 de abril de 1977 comenzaron las marchas semanales de las Madres de Plaza de Mayo y, más allá de los casos personales de cada una, era el principio mismo del uso sistemático de la represión y el terrorismo de Estado como método de gobierno lo que se quería denunciar y combatir. En el espacio simbólico de la Plaza de Mayo, a partir de 1981, comenzó a organizarse la “marcha de la resistencia” que dura veinticuatro horas y cuya consigna varía cada año.

La Asociación Abuelas de Plaza Mayo se creó en noviembre de 1977 con el objeto de reclamar por sus nietos nacidos en cautiverio o apropiados-adaptados con información falsa sobre sus orígenes. En el mismo año del golpe militar, padres, hermanos y cónyuges de detenidos-desaparecidos y de presos políticos “legales” constituyeron la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.

Estas organizaciones salieron del espacio privado al público para expresar su protesta y se movilizaron a partir del papel que jugaban desde hacía décadas como guardianes y responsables del hogar;

pero como desafiaron la política dictatorial destinada a privatizar las consecuencias de la represión y pudieron vencer el aislamiento provocado por el miedo, el terror o la pasividad, politizaron las demandas de respeto por la vida y el derecho de padres y familiares por conocer el destino de las víctimas.

A pesar de la represión, las expresiones de descontento podían ocupar carriles distintos de los de la tradicional protesta obrera. La cultura, por ejemplo, tampoco estuvo ajena. Una de las expresiones de resistencia más notable fue la organización del ciclo Teatro Abierto, un festival teatral que se realizó por primera vez en 1981 en el que se presentaban obras cuyos temas centrales se relacionaban con la violación de los derechos humanos y la falta de libertades.

El fin de la dictadura militar y el triunfo del radicalismo, encabezado por Raúl Alfonsín en 1983, abrieron nuevas expectativas en el conjunto de la población. El advenimiento de un nuevo gobierno democrático era un importante desafío tanto para los dirigentes en general como para toda la sociedad.

— *Los gobiernos democráticos*

Aunque había enorme expectativas, el terreno estaba minado: la herencia del pasado represivo había dejado profundas huellas. Y, a pesar de ciertos matices que diferenciaban a los diversos planes económicos, en el largo plazo la política económica de los sucesivos gobiernos democráticos se fue revelando en parte como una continuidad a la inaugurada por los militares. Luego de Alfonsín, la llegada de Carlos Saúl Menem a la presidencia en 1989, independientemente de las promesas de “salariazó” y “revolución productiva”, cerró el círculo iniciado por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz en 1976.

Así, se completó el proceso de desindustrialización en términos globales y de desinversión del sector; se produjo una importante fuga de capitales al

exterior y los niveles de desocupación llegaron a cifras impensables cien años atrás. Acompañando estas tendencias, se generó un fuerte y constante debilitamiento del Estado y de los sectores medios y obreros. En consecuencia, la protesta social se adecuó a estas circunstancias mostrando diversos tonos y matices.

— *Las protestas*

La apertura democrática recreó un espacio apto para una variedad de actuaciones públicas y colectivas, y se retomaron experiencias previas. También se revitalizaron las asociaciones de la sociedad civil en los barrios y las localidades que habían estado a la vanguardia de los reclamos contra los impuestos y de las protestas vecinales de 1982.

Pero el estado permanente de huelga y movilización dañó al gobierno de Alfonsín y, desde allí, la trama de la protesta social fue transformándose cada vez más y convirtiéndose en absolutamente diversa y heterogénea. Algunas manifestaciones conflictivas fueron los saqueos. En su realización se combinaron tanto las necesidades de la población como el impulso de la acción colectiva de las redes clientelares que alimentaban a los partidos políticos tradicionales, como el peronismo.

El primero, protagonizado por quienes habían perdido sus empleos y la protección del Estado, se produjo cuando finalizaba el mandato presidencial de Alfonsín en mayo de 1989. Desde entonces, la palabra saqueo comenzó a designar una compleja y amplia trama de actividades que abarcaba desde la toma de alimentos consumidos en el mismo lugar de los acontecimientos, o transportados a las viviendas de los saqueadores, hasta la construcción de barricadas, el apedreo de negocios o el incendio de algunos comercios.

Estos hechos cruzaron los períodos gubernamentales de Alfonsín, Menem y Fernando de la Rúa. En cambio, los cortes de rutas y los movimientos contra los excesos policiales y el “gatillo fácil” se

concentraron en la gestión de los dos últimos gobernantes y continúan en la actualidad.

Por otra parte, los medios de comunicación masivos juegan un papel importante para otorgarles visibilidad a las protestas, y hasta generan fenómenos mediáticos alrededor de algunas de ellas.

— Causas

El desconocimiento de los convenios colectivos, el incremento de los ritmos de trabajo y de la productividad obrera, las privatizaciones, la elevación de la edad jubilatoria, la rebaja de las indemnizaciones, el alargamiento de la jornada laboral y la caída salarial fueron un cóctel explosivo que estalló en las manos de los gobernantes cuando la población protestó de diferentes formas. Y allí emergieron otros repertorios de confrontación, vinculados al fenómeno de la desocupación en un contexto de fragmentación de los actores sociales y de multiplicación de las demandas sectoriales por la continua aplicación local de políticas neoliberales: *los cortes de rutas y el movimiento piquetero*.

La ejecución de los planes privatizadores afectó las economías provinciales. En el caso de Neuquén, la privatización de la empresa estatal YPF, ubicada en el área de Cutral Có-Plaza Huincul, llevó a la emergencia de protestas en forma de puebladas y cortes de rutas. Cuando entre el 20 y el 26 de junio de 1996 se produjo el corte de la ruta 22, quienes ejercieron la custodia de las barricadas recibieron el nombre de “piqueteros”. Los que ocuparon la escena de la protesta bajo el reclamo de “trabajo” y la denuncia de la corrupción y la falta de honestidad de los políticos locales recibieron esta denominación.

Desde entonces, y en forma creciente, la interrupción del tránsito en rutas y calles urbanas se extendió a casi todo el país y se transformó en la principal forma de protesta, pero también realizaron otras acciones, como la ocupación de sedes gubernamentales en el ámbito municipal.

La visibilidad y efectividad fueron claves en la extensión del piquete como factor de presión y forma de lucha.

La dimensión de la protesta favoreció el surgimiento y la organización de comisiones de desocupados, asambleas populares y organizaciones no gubernamentales (ONG); incluso el cuadro del movimiento piquetero se hizo cada vez más complejo. Las organizaciones de base se multiplicaron: la Federación de Tierra y Vivienda, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Desocupados Teresa Rodríguez (MTR), la Coordinadora Aníbal Verón, el Polo Obrero (PO) y el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP), surgido como una organización de jubilados en oposición a la destrucción del sistema previsional.

Los desocupados se han organizado, debaten sobre los objetivos, las características y las formas de organización, y algunas agrupaciones han establecido comedores, merenderos, hornos de pan y huertas.

Si bien la protesta de los desocupados ocupó la escena, ello no significó que se abandonaran las demandas de otros actores. Los organismos de derechos humanos, no sin conflictos internos, continuaron efectuando sus reclamos, aunque debieron adecuarse a las nuevas situaciones.

La novedad en este plano la aportaron los jóvenes nucleados en la agrupación HIJOS, que se constituyó en un movimiento social para exigir justicia articulado en torno a los “escraches”, es decir, a la denuncia de la impunidad y la visibilidad de los genocidas para evitar que se mantengan en el anonimato. Los “escraches” son una herramienta política, una forma de movilización y de participación que incluye casi siempre la presencia de una murga y de grupos de teatro. Como ocurriera con los “piquetes”, pronto fueron usados por otros actores sociales lo que configuró una nueva forma de acción colectiva.

— *Diciembre de 2001*

La llegada del gobierno de la alianza UCR-FRE-PASO, a fines de 1999, abrió un breve paréntesis esperanzador con su promesa de modificar los rasgos más cuestionados del modelo económico menemista: personalismo, pactos secretos, corrupción, falta de control, etc. Sin embargo, una vez en el gobierno, la distancia entre las promesas y la realidad fue el detonante para que las voces de la protesta se hicieran oír nuevamente.

La recesión económica, la caída del PBI, la profundización del endeudamiento externo y las políticas de ajuste permanente, que sólo acentuaban la recesión, sumadas a la grave crisis política, conducían a un callejón sin salida. Y cuando el 3 de diciembre de 2001 el gobierno bloqueó los depósitos y salarios existentes en los bancos, toda la situación contenía los componentes para una explosión.

Durante ese mes se multiplicaron las protestas, los saqueos o simplemente la demanda de alimentos. Es difícil resumir el número y la magnitud de las personas involucradas en ellos, incluso diferenciar los que fueron saqueos propiamente dichos de las demandas de alimentos, los que fueron espontáneos de aquellos inducidos. Sin embargo, hay un elemento común que cruzó los comportamientos populares de esos días: la impaciencia y la decisión de protesta.

El 19 y 20 de diciembre de 2001, el continuo estado de postergación de la población se hizo sentir cuando el gobierno declaró el estado de sitio; las clases medias, cuyos ahorros habían sido confiscados por los bancos públicos y privados, salieron a las calles y marcharon a la Plaza de Mayo.

A partir de ese momento, los “cacerolazos” se repitieron cotidianamente. Y el rostro de la protesta incluyó a ahorristas y deudores, bancarios y no bancarios.

La “rebelión de las cacerolas” desembocó en las asambleas populares de grupos de vecinos que se reunían para deliberar en plazas y esquinas de la

ciudad de Buenos Aires así como en algunas del interior del país. Los asambleístas cuestionaron todo: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las formas de representación política y, en algunos casos, hasta el comportamiento que los ciudadanos habían tenido hasta ese momento. Pero con el tiempo, se hizo visible su decadencia.

— *Cuadro heterogéneo*

La modalidad de los cortes y los piquetes, principalmente, continúa en la actualidad junto con las protestas de organismos de Derechos Humanos y aquellas realizadas por el problema de la inseguridad.

Así, se configura un cuadro heterogéneo de formas, actores y demandas donde convergen todas las experiencias acumuladas durante las últimas décadas: conviven elementos residuales de la lucha obrera y los nuevos repertorios de acción colectiva que resultan de los cambios estructurales, de las acciones gubernamentales y de las prácticas sociales de los diversos protagonistas de nuestro tiempo.

La gente utiliza nuevas herramientas para reclamar por sus intereses y las profundas transformaciones parecen anunciar que, posiblemente, estamos asistiendo a la conformación de un nuevo entramado social.

Libertad de expresión y despenalización de la protesta social

Los argumentos a favor de penar la protesta social se fundan en varias decisiones judiciales basadas en una interpretación de los derechos en juego, la Constitución Nacional, el estado de necesidad y la misma concepción de derechos. Pero existen otros que no penalizan la protesta. Este trabajo intenta señalarlos y propone una interpretación alternativa.

En la primera parte se han expuesto varios aspectos del contexto en el que surgen los reclamos de los diferentes sectores sociales y, en particular,

de aquellos en forma de cortes de ruta. También, se analizó la situación económica y política en el que se desarrollan los mismos.

En ésta, se mostrará si los argumentos que fundan dichas decisiones judiciales pro penalización ignoran o mal interpretan algunos de los principios y derechos con los que un Estado democrático debe encarar las demandas.

— Opiniones

Patricia Walsh, diputada nacional por la Capital Federal de Alianza Izquierda Unida, integrante de las Comisiones de Derechos y Garantías, Educación y Libertad de Expresión, indica -en una consulta realizada en abril último- que existen, desde hace algunos años, varios proyectos vinculados a la no criminalización de la protesta social. Uno de ellos es el de la diputada nacional Alicia Castro (Frente para el cambio, provincia de Buenos Aires) que propone amnistía. Otro, que contó con la firma de Walsh, del diputado nacional Ricardo Gómez (Partido Justicialista, provincia de Buenos Aires), de mandato cumplido cuando se renovó la Cámara en diciembre del año pasado, es también de amnistía.

Por su parte, Ariel Basteiro (Partido Socialista, provincia de Buenos Aires), presentó un proyecto por el “desprocesamiento a los luchadores populares”. Y, por último, el de “extinción de la acción penal y de la pena”, de Basteiro y Walsh, con la firma de otros trece diputados nacionales.

Con respecto a éste, Walsh señala: “Es producto del compromiso que adoptamos con Ariel (Basteiro) de impulsar un proyecto unitario, lo cual busca dotarlo de mayor fuerza en el ámbito parlamentario”.

La diputada por Izquierda Unida dice: “tenemos alrededor de 4.000 procesos judiciales en trámite, algunos elevan esta cifra a 6.000, por hechos que nosotros entendemos se enmarcan dentro de lo que llamamos ‘protesta social’. Son los piqueteros, naturalmente, pero no sólo ellos, la lista de esos mi-

les incluye a todo tipo de personas que han protestado: ahorristas, jubilados y pensionados, docentes, trabajadores de la salud, de empresas recuperadas, integrantes de comunidades aborígenes y de minorías sexuales, dirigentes sindicales, y hasta sacerdotes católicos como el padre Jesús Olmedo de La Quiaca, por una protesta por vacuna contra la aftosa en mal estado”, enumera.

Para Walsh no hay que olvidar que “la protesta con la forma de corte de ruta surgió en las localidades afectadas por la pérdida de miles de puestos de trabajo, comunidades cuya principal fuente de empleo era YPF. Por eso se alzaron en Cutral-Có y Plaza Huinul, al sur, y en Libertador General San Martín y General Mosconi, al norte”.

— Libertades

Como vocal de la Comisión de Libertad de Expresión menciona que “la misma, en un país como el nuestro, está fuertemente condicionada por la existencia de grupos económicos que se adueñaron de los medios de comunicación social. La Ley de Radiodifusión, que todavía está vigente, aunque con un par de artículos que se han derogado y sustituido este año en el Congreso, es de la dictadura militar”.

Además de la libertad expresión, el tema de la **libertad de circulación** también forma parte del debate. Según Walsh, “ésta se halla fuertemente condicionada por un sistema de peaje en las rutas nacionales de la mayoría de las provincias, pero no todas”. “¿Por qué no todas?” Esa es una pregunta que ella se hace.

Para la diputada, “hay una tensión entre los derechos y garantías que la Constitución Nacional establece, y las luchas que sectores sociales y políticos ponen en juego cuando consideran avasallados sus derechos. Es un debate político, aunque lo técnico-jurídico tiene su lugar”.

“En un país con la mitad de la población debajo de la línea de la pobreza, la otra mitad no quie-

re verse perjudicada. Incluso, en algunos lugares, el premio por presentismo no es tal, sino que forma parte de un porcentaje importante del salario. Salario 'en negro' porque muchas veces son sumas no remunerativas, o sea, no integran el salario 'en blanco', expresa. Walsh manifiesta, además, que "esto genera una tensión entre los trabajadores pobres que quieren llegar a su lugar de empleo y los desocupados que cortan las rutas o impiden la circulación en las ciudades, como ocurre en la Capital".

El tema es si en dicha tensión esas luchas van ganando solidaridad o la pierden. "Los ahorristas tuvieron mucha solidaridad y el apoyo de los medios. Se trataba, claro, de ahorros. En cambio, los piqueteros están siendo objeto de una campaña mediática para restarles legitimidad. Se trata de planes de 150 pesos, para Jefes y Jefas de Hogar, con la cantidad de hijos que tengan, o sea, de cinco pesos por día, para tres, cuatro, cinco o seis chicos. Es igual para todos", opina.

En estos casos, se trata de la comida, es decir, de la subsistencia. "Cualquiera sea la evaluación que hagamos, cuando las personas que se encuentran bajo proceso son miles, y se llega a la condena, lo que naturalmente tendremos es cientos, y luego miles, de presos políticos. Finalmente, la capacidad legislativa de amnistiar está también contemplada en la Constitución Nacional", afirma la legisladora.

Si bien el mismo presidente de la Nación, Néstor Kirchner, ha señalado en varias oportunidades que no se va a criminalizar la protesta social, Walsh sostiene que "es falso y los números del país lo demuestran. Con el 'endurecimiento' de la legislación penal, es decir, la acumulación de penas, quienes protesten podrían ir a la cárcel por muchos años. Un gobierno que proclama la defensa de los Derechos Humanos no puede tener miles de presos. Llegado el caso, por protestar por aquello que hace a la vigencia de los Derechos Humanos, como el de-

recho a la alimentación, a la salud, al empleo, a la vivienda, al medio ambiente, por citar sólo algunos", concluye.

Por su parte, la socióloga Maristella Svampa¹ a quien le preguntamos sobre el origen de los movimientos sociales que caracterizan, sobre todo, la década de los 90 en Argentina, como es el piquetero, coincide con la diputada Walsh en que "el hambre y la desocupación en nuestro país son el principal reclamo que el Estado debe atender en lugar de penalizar la protesta". Según Svampa, "desde el comienzo, el movimiento piquetero pidió trabajo, sin embargo, el gobierno de (Carlos) Menem y los sucesivos contestaron con planes sociales exigiendo una contraprestación laboral de cuatro horas diarias. Recién en 1999, después de una ardua lucha, por ejemplo la que se dio en el conurbano bonaerense contra los punteros peronistas, la mayoría de estas organizaciones obtuvieron cierta autonomía y pudieron contraer esos recursos para canalizarlos en el trabajo solidario, en los comedores, en las huertas, y también en las experiencias de autogestión".

Según la socióloga, "la autogestión, al igual que la recuperación de fábricas, es una de las principales características pero, ciertos sectores, prefieren no hacerlas visibles y hablar de los cortes de rutas". Finalmente, considera que "reconocerlo sería asumir que hay muchos movimientos piqueteros que están interesados y ligados al proceso de desarrollo de la economía social".

Conclusión

A través del presente trabajo se intentó analizar las distintas formas de protesta social en Argentina, especialmente, el surgimiento del movimiento piquetero. Se pudo observar de qué manera cobra fuerza la idea de que la gente común está utilizando nuevas herramientas para defender sus intereses y derechos.

1 Autora, junto a Sebastián Pereyra, del libro *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Biblos, Buenos Aires, 2002.

Hemos visto que las profundas transformaciones ocurridas en las últimas décadas parecen anunciar que la movilidad de las personas se debe a una búsqueda tal como es la obtención de la ciudadanía social. También, se planteó el debate sobre la libertad de expresión, de circulación y las figuras jurídicas que existen en torno a “la despenalización de la protesta”.

Más allá de reconocer la presencia de cierto clientelismo no se puede pasar por alto que los reclamos se originaron a partir de algo tan legítimo como la necesidad de pan y trabajo. Y ese fondo, a pesar de las críticas, se conserva.

Penalizar la protesta social sería interpretar garantías constitucionales de los ciudadanos de manera contraria al ideal democrático porque el respeto a la libertad de expresión no sólo implica que el Estado se abstenga de violarla sino que, además, actúe para garantizarla.

De esta manera, cuando existe una situación de necesidad que, como en los casos mencionados, es por el derecho a la alimentación o al empleo, la protesta debe respetarse y es el Estado quien tiene el deber de hacerlo en lugar de “criminalizar o penalizar” la misma.